

Antofagasta, a uno de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Que en esta causa **Rol Único 2140340699-3, Rol Interno T-206-2021** del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta y Rol Corte 226-2022, el abogado señor Francisco Leppes López, por los demandados, recurre de nulidad contra la sentencia definitiva de ocho de abril del año dos mil veintidós, que acogió la demanda de denuncia de derechos fundamentales dirigida en contra de Importadora y Exportadora Multitiendas Eduss E.I.R.L representada por don Eduardo Riquelme Gutiérrez y en contra de este último, declarándose que la denunciada lesionó la garantía de integridad psíquica del actor, condenándosele a pagar diversas indemnización y prestaciones. Además, se declaró que las demandadas constituyen una única empresa para los efectos del artículo 3° del Código del Trabajo y deben responder solidariamente de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales y de instrumentos colectivos.

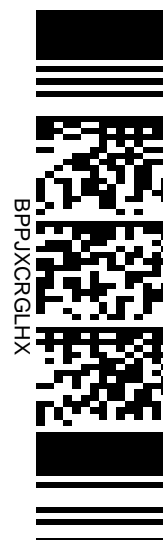
Con fecha 22 de noviembre en curso, se efectuó la vista del recurso, escuchándose los alegatos de los abogados de las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el abogado señor Francisco Leppes López, por las demandadas, dedujo, en lo principal, la causal de nulidad prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por haber sido dictada la sentencia con infracción manifiesta a las normas de valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Luego de referirse a cuestiones generales respecto de la apreciación de la prueba conforme a la sana crítica y, en particular, del principio de la razón suficiente, señaló que la decisión de la sentenciadora se aleja de las máximas de la experiencia, sobre todo de la experiencia laboral.

Precisó que dicha máxima y principio se ven vulnerados en lo referido a la imparcialidad y credibilidad



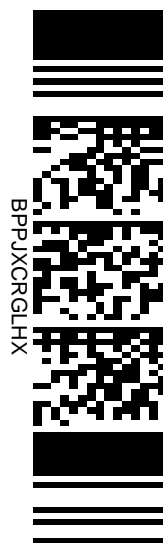
de los testigos en cuya declaración se apoyó la sentenciadora.

Recordó que respecto a los fundamentos que tuvo en consideración el tribunal a quo para fundamentar la declaración de único empleador, se limitó, principalmente, a las declaraciones de los testigos Joseph Daza y Teresa Reyes, además de las causas traídas a la vista en causa RIT T-528-2020, T-40-2021, T-6-2021, y T-44-2021, todo lo que consta entre los considerandos Décimo a Vigésimo Tercero de la sentencia.

Agregó que en audiencia de fecha 25 de noviembre de 2021, los dos testigos señalaron haber demandado a las mismas demandadas, lo que se ve ratificado por las causas que se trajeron a la vista. Explicó que únicamente se trajeron a la vista las demandas deducidas en las causas citadas, pero no las sentencias que se pronunciaran sobre el fondo del asunto. Dijo que ello resulta relevante, por cuanto en dichas causas se arribó a un acuerdo, existiendo una negativa generalizada a los hechos demandados. De esta forma, y siendo los relatos meras aseveraciones plasmadas en una demanda que no han sido objeto de contradicción, la cual queda al arbitrio de una de las partes interesadas en obtener una cuantiosa suma de dinero, careciendo de toda imparcialidad, corresponde anular la sentencia al fundarse en meros relatos que no dicen relación alguna al caso de marras.

Afirmó que no existe pronunciamiento respecto de la credibilidad de los testigos impugnada por su parte.

Por ello dice que la valoración de la prueba no fue idónea ni conforme a las reglas de la sana crítica, por cuanto se les otorgó una valoración óptima a las declaraciones de los tres testigos aportados por la demandante, sin pronunciarse sobre las observaciones y alegaciones de credibilidad, además de dar por concluida la entrega de una carta que la propia persona involucrada negó en juicio.



En subsidio dedujo la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, en la hipótesis de infracción de ley, denunciando como vulnerados los artículos 3, 507, 454 N° 5, 456, todos del Código del Trabajo; 54 y 1698 del Código Civil, y 2 y 8 de la Ley 19.857.

Citó los incisos tercero a quinto del artículo 3 del Código del Trabajo, el artículo 507 inciso 3° N° 3 del mismo cuerpo normativo e indicó que el legislador estableció una serie de supuestos que deben satisfacerse para encontrarnos ante la existencia de una unidad económica, entre ellos, la existencia de una dirección laboral común, complementariedad de los servicios y existencia de controlador común, haciéndose presente que la sola participación dentro de una sociedad, no permite configurar la existencia de una unidad económica.

Hizo referencia a la institución de la unidad económica y afirmó que de acuerdo a las modificaciones legales de la Ley N° 20.760, para que nos encontremos ante la declaración de unidad económica entre dos o más empresas se requiere: *"i) la existencia de una dirección laboral común; ii) concurre la similitud o complementariedad de condiciones de los productos o servicios que se presten o elaboren; iii) existencia entre las demandadas de un controlador común; y iv) la existencia de subterfugio, ergo, una intencionalidad causal consistente en eludir a través de la constitución de varias empresas, del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales"*.

Por ello, no obstante lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil y a pesar de la inexistencia de prueba que vinculara a las demandas, como un informe de la Dirección del Trabajo, escrituras estatutarias y modificatorias de las sociedades demandadas y certificaciones de socios y sus porcentajes de participación y domicilios registrados en el Servicio de Impuestos Internos, se condenó a su representada, sin indicar el subterfugio en que se habría incurrido en la creación o establecimiento de la unidad económica declarada.

BPPJXCRGLHX

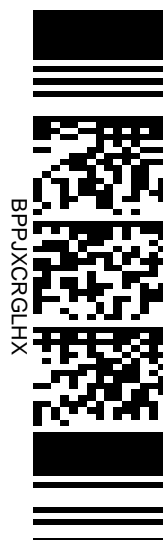
Citó jurisprudencia, agregando que no se eludió el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, ni se incumplió alguna obligación y recordó lo dispuesto en el artículo 54 del Código Civil indicando que la persona jurídica tiene vida propia, debiendo ser representada judicial y extrajudicialmente, formando una universalidad jurídica propia y distinta a quienes la constituyen, indicando que Importadora y Exportadora Multitiendas EDUSS EIRL, es una empresa individual de responsabilidad limitada definida en el artículo 2 de la Ley 19.857 que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 8 del mismo cuerpo normativo debe responder: *"exclusivamente por las obligaciones contraídas dentro de su giro, con todos sus bienes. El titular de la empresa responderá con su patrimonio sólo del pago efectivo del aporte que se hubiere comprometido a realizar en conformidad al acto constitutivo y sus modificaciones"*.

Por ello cree improcedente que, por el hecho de ser representante o propietario de la demandada principal, se permita comprender la existencia de una unidad económica, más aún si no ha existido compromiso patrimonial ni actuación individual alguna de su mandante.

Afirmó que el contrato de trabajo y anexos suscritos, como el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales siempre se han efectuado con el patrimonio, personalidad, nombre y rol único tributario de su mandante, no correspondiendo asociar a Multitiendas Eduss.

SEGUNDO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso porque el fallo no ha incurrido en ninguno de los vicios denunciados.

TERCERO: Que esta Corte reiteradamente ha señalado que el recurso de nulidad no puede ser sede para debatir acerca del mérito de la prueba rendida y su valoración, cuestión privativa de los jueces del juicio, sino, exclusivamente, el cumplimiento de las diferentes garantías que el ordenamiento reconoce a los intervinientes, y sólo en



la medida que se hubiese producido una violación a éstas.

Luego, cuando se deduce la causal prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por haber sido dictada la sentencia con infracción a las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, debe analizarse la estructura sustancial de la sentencia, en la medida que la causal protege la garantía de su razonabilidad, particularmente en su determinación fáctica, en la medida que exigiendo la ley valoración acorde a las reglas de la sana crítica, no puede contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos y técnicos o, en otros términos, se debe controlar el respeto a las señaladas reglas de la sana crítica, e incluso más, no cualquier apartamiento de las reglas de la sana crítica sino que, como lo indica la propia causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, sólo en caso de una infracción manifiesta.

CUARTO: Que, el recurso, más allá de explayarse sobre cuestiones generales del sistema de valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y en especial sobre el principio lógico de la razón suficiente y las máximas de la experiencia, afirmó que la sentencia los vulneraría al haber considerado prueba testimonial consistente en los dichos de trabajadores que también accioneros en contra de las demandas, y que si bien se trajeron a la vista las causas no ocurrió lo mismo con las sentencias en que se llegaron a acuerdos, pero su parte negó los hechos. En resumen, los testigos carecerían de imparcialidad, por lo que debería anularse la sentencia.

Por cierto, si se lee el recurso no se precisa, mínimamente, en qué parte de la sentencia se vulneró el principio lógico de la razón suficiente. Se trata de un principio que opera a nivel de valoración de la prueba y supone que los hechos que establece la sentencia se asienten en la prueba rendida y dicho establecimiento fáctico esté justificado argumentativamente.

BPPJXCRGLHX

La sentencia, más allá de otra prueba relevante, como antecedentes médicos y psicológicos, considera los dichos de estos testigos; reconoce que han deducido también acciones en contra de los demandados y procede a valorar sus dichos. Por lo mismo, no puede decirse que, en el punto, la sentencia carezca de razonamiento o que estableciera hechos relevantes sin basarse en la prueba rendida, por lo que no se divisa infracción alguna al principio.

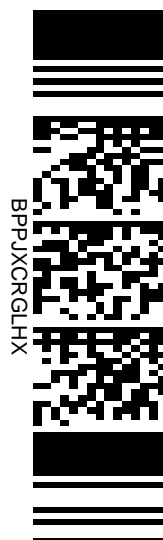
En todo caso si lo reprochado es falta de fundamentación, y tratándose de una causal que supone la dictación de una sentencia de remplazo, debe concluirse que el vicio no ha influido en lo dispositivo del fallo, pues, en esta materia, que no existen testigos inhábiles, al tiempo que la falta de imparcialidad que se atribuye a los testigos no nace de una situación preexistente de animadversión u odio hacia los demandados o de una amistad tal con el demandante de la que pueda derivarse un móvil espurio para declarar en contra o a favor de alguna de las partes, sino que su conocimiento de los hechos nace de haber padecido una situación similar en el trabajo, lo que, en principio, no configura un motivo para repelar o tornar inaceptables sus dichos y, por el contrario, da cuenta de una multiplicidad de casos de la misma naturaleza.

En cuanto a las máximas de la experiencia, el recurso ni siquiera ensaya cuál o cuáles serían las máximas de la experiencia vulneradas por el tribunal en el proceso de valoración probatoria, por lo que se carece de toda base para efectuar un análisis.

QUINTO: Que en subsidio la parte demandada dedujo la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo.

En este caso la competencia de este tribunal está restringida, exclusivamente, a determinar si en la sentencia definitiva dictada en el juicio se han aplicado correctamente las normas que se dicen vulneradas en el recurso.

En otros términos, reclamándose una errónea aplicación de ley, para que el recurso pueda prosperar se



requiere que, en la sentencia definitiva, exista un error en la aplicación de una norma decisoria litis, sea de naturaleza procesal o sustantiva, pudiendo consistir el error, como ya tradicionalmente se ha determinado, en la falta de empleo de la norma pertinente, en su empleo indebido, o bien, la aplicación de una impertinente, y siempre que, además, la equivocada interpretación de ley influya en lo dispositivo del fallo.

SEXTO: Que el recurrente emplea dos normas que tiene sentidos diversos, para argumentar que la declaración de unidad económica requiere requisitos que no concurrirían en el presente caso, lo que, por cierto, solo puede ser desechado.

En efecto, cita los incisos tercero a quinto del artículo 3 y el artículo 507 inciso 3° N° 3, ambos del Código del Trabajo, asumiendo que la existencia de un subterfugio o intencionalidad en eludir a través de la constitución de varias empresas el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales sería una exigencia para la declaración de único empleador.

A este respecto debe recordarse que el artículo 3 del Código del Trabajo establece, en lo pertinente, lo siguiente: *"Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada."*

"Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común, y concurren a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común."

BPPJXCRGLHX

"La mera circunstancia de participación en la propiedad de las empresas no configura por sí sola alguno de los elementos o condiciones señalados en el inciso anterior."

"Las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso cuarto serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales o de instrumentos colectivos."

Por su parte, el artículo 507 del Código del Trabajo, también en lo que interesa, prescribe:

"La sentencia definitiva que dé lugar total o parcialmente a las acciones entabladas (se refiere a las acciones derivadas de lo previsto en el artículo 3 inciso cuarto del Código del Trabajo) deberá contener en su parte resolutiva:"

"1. El pronunciamiento e individualización de las empresas que son consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, conforme a lo señalado en el inciso cuarto del artículo 3° de este Código."

"2. La indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el empleador dirigidas a materializar su calidad de tal, así como aquellas destinadas al cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales y al pago de todas las prestaciones que correspondieren; bajo apercibimiento de multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, la que podrá repetirse hasta obtener el debido cumplimiento de lo ordenado."

"3. La determinación acerca de si la alteración de la individualidad del empleador se debe o no a la simulación de contratación de trabajadores a través de terceros, o bien a la utilización de cualquier subterfugio, ocultando, disfrazando o alterando su individualización o patrimonio, y si ello ha tenido como resultado eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que establece la ley o la convención. Si así lo determina, deberá señalar de manera precisa las conductas que constituyen dicha simulación"

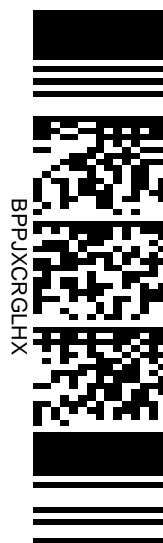
BPPJXCRGLHX

o subterfugio y los derechos laborales y previsionales que por esta vía se hubieren vulnerado, debiendo aplicar al infractor una multa de 20 a 300 unidades tributarias mensuales. En estos casos, será aplicable a las multas señaladas lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 506 de este Código.”

“Quedan comprendidos dentro del concepto de subterfugio referido en el párrafo anterior, cualquier alteración de mala fe realizada a través del establecimiento de razones sociales distintas, la creación de identidades legales, la división de la empresa, u otras que signifiquen para los trabajadores disminución o pérdida de derechos laborales individuales o colectivos, en especial entre los primeros las gratificaciones o las indemnizaciones por años de servicios y entre los segundos el derecho a sindicalización o a negociar colectivamente.”

SÉPTIMO: Que de las normas parcialmente transcritas, aparece irrefragable que los requisitos legales para estar ante una unidad económica entre dos o más empresas se encuentra en lo previsto en el artículo 3 del Código del Trabajo, que, por cierto, no contempla que para ello, necesariamente deban haber simulado la contratación de trabajadores a través de terceros, o empleen un subterfugio para eludir el cumplimiento de obligaciones laborales o previsionales y, por cierto, no se divisa razón alguna para contemplarlo ni el recurrente ensaya alguna plausible, cuanto más si el sentido de la declaración está en la ampliación de los patrimonios en los cuales el trabajador puede obtener el cumplimiento de las obligaciones en caso que las empresas operen como un solo empleador con respecto de la relación laboral.

Cuestión distinta es que, además, las empresas sí hayan recurrido a la simulación o subterfugio pues, en tal caso, la sentencia que constate la existencia de unidad económica debe, además de efectuar la declaración de unidad económica, sancionarlas por haber cometido una grave



infracción a la normativa laboral, siempre que, por cierto, se haya ejercido la acción respectiva.

Luego, si la simulación o el subterfugio fueran elementos imprescindibles de la existencia de una unidad económica, no se entendería la redacción de la norma que dispone, en primer término, la declaración de la unidad económica; seguidamente, el señalamiento de las medidas que debe adoptar el empleador dirigidas a materializar su calidad de tal, como las destinadas al cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales y al pago de todas las prestaciones que correspondieren y, solo con posterioridad y finalmente, para el evento de haber cometido simulación o subterfugio, la imposición de la sanción pecuniaria.

OCTAVO: Que el recurrente, además, echa de menos para la declaración de único empleador la existencia de un informe de la Dirección del Trabajo; escrituras estatutarias y modificatorias de las sociedades demandadas, y certificaciones de socios, sus porcentajes de participación y domicilios registrados en el Servicio de Impuestos Internos, mas, por cierto, ello no es una exigencia prevista en la ley para la declaración efectuada por el tribunal y, como fuera, dice relación con una cuestión probatoria que escapa de los márgenes de esta causal.

Por otro lado, resulta irrelevante que la empresa Importadora y Exportadora Multitiendas Eduss sea una empresa individual de responsabilidad limitada y, como tal, una persona jurídica con patrimonio propio distinto al del titular, pues lo demostrado es que opera, junto con su titular, como una unidad económica y por tanto debe responder de las indemnizaciones y prestaciones dispuestas en la sentencia.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 477, 478, 479 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA, con costas,** el recurso de nulidad deducido por el abogado señor Francisco Leppes López en contra de la sentencia definitiva de fecha ocho de abril de dos mil



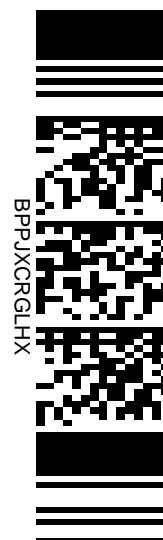
veintidós, dictada en causa RIT T-206-2021, RUC 2140340699-3 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, la que, en consecuencia, no es nula.

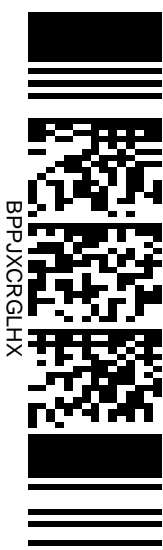
Se deja constancia que se hizo uso de la facultad contenida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 226-2022 (LAB)

Redacción del Ministro Titular Sr. Dinko Franulic Cetinic.





BPPJXCRGLHX

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Dinko Franulic C., Jaime Alvaro Cruces N. y Abogado Integrante Marcelo Rodrigo Diaz S. Antofagasta, uno de diciembre de dos mil veintidós.

En Antofagasta, a uno de diciembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

